

**COMENTARIOS A El desafío de sobrevivir a la irrupción peronista.
Transformaciones en la matriz de financiamiento de la Unión Cívica Radical
(Tucumán, 1943-1955)**

Ana Virginia Persello (UNR)

El texto de Leandro Lichtmajer realiza un importante aporte a la cuestión del financiamiento de los partidos políticos, que tal como señala, ha sido escasamente abordado y para construir el problema tiene en cuenta la mayor o menor normatización que tiene en los estatutos, la relación entre estos últimos y las prácticas efectivas, el lugar que el partido ocupa en el sistema político –gobierno/oposición- y su relación con los grupos de interés para extraer consecuencias en la selección de dirigentes y candidatos. Por otra parte, la escala provincial le permite un mayor acercamiento a los vínculos que se entablan entre los actores.

Lichtmajer sostiene que desde la ocupación del gobierno en Tucumán, en 1917, hasta 1943, momento en que el radicalismo dejó de ostentar posiciones en el aparato estatal, los recursos estatales y el financiamiento de los ingenios sustentaron la estructura partidaria y aun estos últimos fueron los principales contribuyentes en la campaña electoral de 1946, cuando el gobierno nacional y el provincial cambiaron de manos.

Esta afirmación nos conduce a reflexionar no sólo sobre el financiamiento sino acerca de la relación partido/grupos de interés. En 1917, el triunfo de Bascary en Tucumán le mereció a La Nación, todavía extrañada por los resultados electorales a nivel nacional, un comentario que asociaba a los propietarios de ingenios, -“grandes capitanes del sufragio

tucumano” y conservadores “por definición”- con el triunfo radical. La explicación que encontraba el matutino era que, frente al dilema ajeno a sus costumbres de mantener su fidelidad política en la provincia o seguir la tendencia que se imponía a nivel nacional, optaron por esto último y arrastraron a sus peones. Años más tarde, cuando otro radical, Octaviano Vera, gobernaba Tucumán, J.N. Matienzo, ministro del interior de Alvear y Vicente Gallo, senador nacional, lo instaron a deponer sus conflictos con los azucareros, no sólo por lo que ellos representaban como fuerza económica y factor de progreso sino por la colaboración prestada en la campaña para imponer su candidatura.

La hipótesis parece sostenerse también para el caso de Jujuy, donde Benjamín Villafañe, procurador de la compañía azucarera Leach, se defendía de las acusaciones de sus adversarios, sosteniendo que no era “correligionario político, ni protegido de los dueños de los ingenios”, sin embargo, siendo gobernador, respondió a las mismas acusaciones argumentando que sin la colaboración de las grandes empresas no hubiera podido llegar al poder. Los ingenios costeaban dos tercios de los gastos provinciales, hacían campaña y merecían ocupar lugares en la administración pública.

A partir de 1934 los radicales tucumanos contaron nuevamente con los recursos que les suministraba la ocupación del gobierno provincial y con la presencia de sus legisladores en el Congreso Nacional, a los que en 1936 se sumaron, con el levantamiento de la abstención, representantes de otras provincias. Los intereses vinculados a los ingenios estaban entonces empeñados en obtener ventajas que les permitieran superar la crisis de la industria a partir de la sanción de una ley reguladora y cuando el problema se discutió en la Cámara, los radicales enfatizaron la necesidad de proteger los intereses de cañeros y consumidores y evitar que la ley cristalizara las ganancias de los ingenios.

En 1946, después de financiar la campaña, Lichtmajer sostiene que los industriales abandonaron el partido, en el que ya habían dejado de tener presencia pública, “al florecer fuertes impugnaciones a su presencia en las reuniones de los organismos deliberativos”. Nuevamente, entonces, habrían optado, tal como sostenía *La Nación* en 1916, por actuar en consonancia con el gobierno nacional. Y de esto, el texto extrae dos consecuencias: un cambio en el perfil de las dirigencias radicales y en las fuentes de financiamiento. Jóvenes profesionales de clase media reemplazaron a los industriales azucareros y los poseedores o

aspirantes a cargos públicos fueron los principales aportantes, no sin resistencias, a la caja del partido.

El corolario fue la exigüidad de los recursos y los intentos para ampliarlos a través de la búsqueda de mecanismos que fueron incorporados a la carta orgánica, cuestiones que no sólo se dieron en Tucumán sino que pueden constatarse a nivel nacional. El testimonio de Nicolás Babini, que acompañó a Frondizi cuando en 1954 asumió la dirección del partido da cuenta de ello:

[...] la única fuente normal de recursos, la participación en las dietas de los diputados, apenas bastó para mantener una organización mínima. Las contribuciones de los afiliados fueron insignificantes. Los fondos para las campañas electorales se recolectaban entre los partidarios de siempre [...] ni oficinas adecuadas, ni empleados, ni teléfonos [...] locales prestados atendidos por partidarios que lo hacían gratuitamente o poniendo plata [...]³⁰

La cuestión del financiamiento y sus consecuencias en la selección de autoridades y candidatos, claramente reconstruido por el texto de Lichtmajer, nos remite, además, como planteábamos al principio, a la relación entre el partido y los grupos de interés, en este caso los industriales azucareros, que tal como propone el texto actuaron como “grandes contribuyentes”, y en este sentido, queda pendiente la indagación sobre las políticas implementadas por los gobiernos provinciales y los posicionamientos que los legisladores nacionales radicales sostuvieron en relación a la economía azucarera. Por otra parte, el acercamiento a las otras fuerzas políticas que actuaban en la provincia aportaría elementos para ampliar la lectura del problema en la medida en que nos permitiría recuperar la presencia (o no) de los dueños de ingenios en sus filas.

³⁰ Babini, Nicolás. *Frondizi de la oposición al gobierno*. Testimonio, Buenos Aires, Celta, 1984, p.18